



Consejo Económico y Social

Distr. general
16 de julio de 2014
Español
Original: francés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 48º período de sesiones

Acta resumida de la 15ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 9 de mayo de 2012, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Pillay

Sumario

Examen de los informes

- a) Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (*continuación*)

Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero de Etiopía

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.12-42412 (EXT)



* 1 2 4 2 4 1 2 *

Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 10 horas.

Examen de los informes

a) Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero de Etiopía ((E/C.12/ETH/1-3); documento básico (HRI/CORE/ETH/2008); lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/ETH/Q/1-3); respuestas del Gobierno de Etiopía a la lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/ETH/Q/1-3/Add.1, en inglés solamente))

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Etiopía toma asiento a la Mesa del Comité.*
2. **El Presidente** da la bienvenida a la delegación de Etiopía y la invita a presentar el informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero del Estado parte.
3. **El Sr. Yimer** (Etiopía) recuerda que Etiopía ratificó el Pacto en 1993 y dice que en la Constitución de la República Democrática Federal de Etiopía (1995), que reconoce los principales derechos humanos y las principales libertades fundamentales, hay una sección dedicada a los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de los límites de sus recursos, el Gobierno ha adoptado, como lo prevé el artículo 2 del Pacto, medidas decisivas encaminadas a establecer los marcos jurídicos y elaborar las políticas y los planes de acción nacionales necesarios para la realización, protección y promoción de los derechos humanos.
4. A fin de fomentar el crecimiento económico, reforzar las instituciones democráticas y judiciales y crear las condiciones necesarias para fomentar el desarrollo de la democracia y la gobernanza, garantías del ejercicio de los derechos humanos, el Gobierno ha establecido el Plan quinquenal de crecimiento y transformación (2011-2015), un plan ambicioso cuyos objetivos son lograr un crecimiento económico y un desarrollo social sostenibles, acelerados, generales, centrados en la población y basados en los derechos, así como la eliminación de la pobreza.
5. Gracias a las políticas de desarrollo centradas en la población y en los más pobres, el país ha hecho progresos notables en la reducción de la pobreza y en los sectores de la educación, la salud y el empleo. En efecto, según la encuesta de 2010-2011 sobre el ingreso, el consumo y el gasto de los hogares, la tasa de pobreza per cápita disminuyó del 38,7% en 2004-2005 al 29,6% en 2010-2011 en todo el territorio, y del 39,3% al 30,4% en las zonas rurales, mientras que la desigualdad se redujo en un 6,2% en las ciudades. Estos datos indican que Etiopía está bien encaminada para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y reducir a la mitad la pobreza en 2015 a más tardar.
6. A fin de apoyar el crecimiento, el Gobierno debe desarrollar las infraestructuras. Por consiguiente, ha puesto en marcha la ampliación de la red vial, el fortalecimiento de las infraestructuras de educación y de salud y la realización de proyectos de aprovechamiento de los recursos hídricos y de generación de electricidad. En el sector agrícola la política y los planes de desarrollo se centran en la eliminación de la pobreza en las zonas rurales. Para encontrar una solución duradera de este problema se ha elaborado un plan nacional de fomento de la seguridad alimentaria. A este respecto, el Gobierno ha concedido préstamos a las poblaciones rurales que sufren grave escasez de alimentos y está reasentando en zonas fértiles a las familias que lo desean.
7. La Constitución garantiza el derecho a la seguridad social e impone al Estado la obligación de velar por la reinserción de las personas con discapacidad, las personas de edad y los niños sin padres ni tutores, y de prestarles asistencia, dentro de los límites de sus recursos. La Cámara de Representantes del Pueblo ha aprobado diversas leyes a tal efecto.

El Gobierno ha adoptado medidas activas y eficaces para fomentar la participación de las mujeres en la vida política, social y económica del país, aumentar la tasa de inscripción de las jóvenes en la enseñanza superior y reducir la tasa de abandono escolar entre las niñas y las jóvenes en todos los niveles del sistema educativo. También ha adoptado disposiciones legislativas y políticas para acabar con las prácticas tradicionales peligrosas, tales como la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces o forzados. La Constitución y la legislación garantizan la no discriminación de las mujeres en materia de empleo y remuneración. Se han aprobado diversas leyes para garantizar la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres en materia de propiedad, sucesión y control de los recursos, incluida la tierra, tanto en el marco del matrimonio como en caso de disolución del vínculo matrimonial. También se han adoptado disposiciones reglamentarias e institucionales para proteger a los grupos vulnerables y desfavorecidos —niños, huérfanos, personas que viven con el VIH/SIDA— y velar por que se los tenga en cuenta al elaborar las políticas de empleo, educación y salud. En colaboración con las organizaciones no gubernamentales (ONG), se han establecido medidas de readaptación, reinserción y protección en favor de los niños, los jóvenes y las madres que viven en la calle. Gracias a una iniciativa de reagrupación familiar, 16 100 niños de la calle se han reintegrado a su familia y están escolarizados.

8. En Etiopía hay más de 80 naciones, nacionalidades y pueblos. La Constitución reconoce el derecho de cada uno de ellos a hablar, escribir y desarrollar su idioma, de expresar y desarrollar su cultura y de preservar su historia. La diversidad del patrimonio nacional, con nueve sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), favorece los esfuerzos que despliega el Gobierno para impulsar el renacimiento del país y promover su desarrollo a largo plazo. De hecho, cada vez son más los turistas que visitan Etiopía atraídos por su rico patrimonio histórico y cultural, y el Gobierno aspira a convertirla en uno de los principales destinos turísticos de África cuando concluya el Plan de Crecimiento y Transformación.

9. No obstante, la cooperación internacional y las asociaciones siguen siendo esenciales para la realización de muchos de los derechos abarcados en el Pacto, ya que el país aún debe luchar contra la pobreza, el subdesarrollo, el analfabetismo, la sequía, la insuficiencia de las capacidades a escala nacional y unas prácticas tradicionales propias de otra época.

10. **La Sra. Cong** (Relatora para Etiopía) deplora que las respuestas del Estado parte a la lista de cuestiones que deben abordarse se hayan comunicado con tanto retraso a los miembros del Comité y que no asistan a la sesión representantes de los ministerios competentes en los asuntos abarcados por el Pacto. Valora que el Estado parte asigne prioridad a la reducción de la pobreza y despliegue esfuerzos para destinar los frutos del crecimiento económico al logro de ese objetivo; también acoge con beneplácito que se hayan incorporado a la Constitución los derechos económicos, sociales y culturales, y que se hayan reformado el Código Penal, en el que ahora se tipifican como delitos a las prácticas tradicionales peligrosas y a la trata de personas, y el Código de la Familia, en el que ahora la edad mínima para contraer matrimonio se fija en los 18 años tanto para las mujeres como para los hombres.

11. No obstante, la Sra. Cong señala que en el Estado parte el nivel de inseguridad alimentaria sigue siendo uno de los mayores del mundo, que en 2004-2005 el 39,3% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, que sigue habiendo discriminación contra la mujer, que perduran las disparidades entre las regiones en materia de alimentación y servicios sanitarios, educativos y de otra índole y, por último que, al no existir políticas y programas que fomenten la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales, la población tiene dificultades para ejercer esos derechos.

12. La Sra. Cong pregunta qué medidas adopta el Estado parte para declarar inconstitucionales las leyes consuetudinarias y religiosas que se aplican en las regiones. Desea saber si se imparte formación en materia de derechos humanos en todos los niveles de la administración pública del Estado parte y, en particular, a los legisladores, los magistrados, el personal policial y los miembros de las fuerzas armadas. Por último, pide a la delegación que explique de qué manera el Estado parte garantiza que la ley relativa a las organizaciones civiles no limite la independencia de las instituciones de derechos humanos en su territorio ni obstaculice su actuación.

Artículos 1 a 5 del Pacto

13. **El Sr. Ribeiro Leão** desea saber si las dos estrategias encaminadas a reducir la pobreza —el Programa de Desarrollo Sostenible y Reducción de la Pobreza y el Plan de Desarrollo Acelerado y Sostenible para Erradicar la Pobreza (PASDEP)— se elaboraron teniendo en cuenta el carácter transversal de los derechos humanos y el principio de no discriminación, cuáles fueron los principales resultados obtenidos al finalizar la aplicación de esas estrategias y si están vinculadas con otros planes de desarrollo, por ejemplo, el actual Plan quinquenal de crecimiento y transformación.

14. **La Sra. Shin** lamenta que el Estado parte se haya demorado tanto en presentar los informes inicial y periódicos. Hace suya la pregunta de la Sra. Cong acerca de la formación que reciben los magistrados y desea saber, en particular, si también se imparte a los jueces de los tribunales de la *sharia*.

15. Habida cuenta de que la Proclama sobre registro y reglamentación de las entidades benéficas y las sociedades prohíbe a ciertas organizaciones de la sociedad civil recibir más del 10% de sus fondos de donantes extranjeros y de que diversos órganos creados en virtud de tratados ya han recomendado al Estado parte que modifique esa ley y desbloquee los fondos pertenecientes a ONG, la Sra. Shin pide a la delegación que facilite información sobre las medidas ha adoptado el Estado parte para aplicar esas recomendaciones.

16. La Sra. Shin pregunta si es verdad que en el marco del llamado "programa de creación de aldeas" las autoridades ordenan lisa y llanamente a la población, por lo general procedente de grupos étnicos marginados y discriminados, que se desplace a zonas desprovistas de infraestructuras educativas, sanitarias y de otra índole, desea saber a qué se deben esas maniobras y señala que la práctica de obligar a las personas a desplazarse sin consultar con ellas ni indemnizarlas es contraria a las disposiciones del Pacto.

17. Al referirse a los derechos de las mujeres, la Sra. Shin pide a la delegación que facilite datos estadísticos precisos para justificar sus afirmaciones sobre los progresos realizados. Por último, pregunta qué medidas adopta el Estado parte para informar a las mujeres y a las niñas acerca de sus derechos a fin de que puedan presentar denuncias e iniciar acciones.

18. **El Sr. Atangana** aborda la cuestión de la independencia del poder judicial, a la que el Comité contra la Tortura ya se ha referido en sus observaciones finales (CAT/C/ETH/CO/1, párr. 22), y solicita información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para corregir la situación.

19. Con arreglo a la Constitución, los instrumentos internacionales forman parte del derecho interno, de manera que es posible invocarlos ante los tribunales. El Sr. Atangana desea saber si ya se han invocado derechos consagrados en el Pacto, si existe jurisprudencia al respecto y si la delegación dispone de datos estadísticos sobre causas que se hayan basado en esos derechos.

20. **El Sr. Sadi** pregunta por qué el Estado parte se ha demorado tanto en presentar los informes inicial y periódicos. Desea saber en qué medida los encargados de formular las

políticas conocen el Pacto y lo tienen en cuenta en su labor. Además, habida cuenta de la enorme extensión del territorio del Estado parte y de su división en nueve gobiernos regionales casi independientes, pregunta cómo controlan las autoridades federales la aplicación del Pacto y hasta qué punto los derechos consagrados en la Constitución reflejan fielmente las disposiciones del Pacto. Pide a la delegación que indique ejemplos concretos de "medidas decisivas" que se hayan adoptado para promover los derechos comprendidos en el Pacto.

21. El Sr. Sadi lamenta profundamente que la institución nacional de derechos humanos del Estado parte no esté en consonancia con los Principios de París, porque si se ajustara a ellos podría desempeñar una función crucial y aportar considerable apoyo al Gobierno en relación con sus obligaciones dimanantes del Pacto.

22. El Sr. Sadi pregunta cómo está organizada en el Estado parte la educación en materia de derechos humanos (en qué nivel del plan de estudios se imparte, cuáles son sus contenidos, en qué medida se tiene en cuenta el multilingüismo). También desea saber en qué medida la ayuda extranjera que recibe Etiopía está supeditada al respeto de determinados derechos y pregunta a la delegación si puede señalar algún ejemplo.

23. **El Sr. Kedzia** desea saber cuáles son las principales metas de la estrategia de reducción de la pobreza hasta 2015, qué función desempeñan en ella las normas relativas a los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y si se aplica una metodología basada en los derechos humanos.

24. Tras señalar que Etiopía aún no ha ratificado ninguno de los procedimientos de comunicación establecidos en el derecho convencional, el Sr. Kedzia pregunta si ello obedece a una estrategia política. También desea saber si el Estado parte prevé dirigir una invitación permanente a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. Recuerda que, en su respuesta a la lista de cuestiones que deben abordarse, el Estado parte indicó que no estaba previsto modificar el Código Penal para despenalizar la homosexualidad, y pregunta en qué consideraciones se basa esa decisión.

25. Habida cuenta de que el Estado parte ha mencionado la posibilidad de recurrir una decisión de un tribunal de la *sharia* ante un tribunal ordinario, ante el Defensor del Pueblo o ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sr. Kedzia pide a la delegación que proporcione ejemplos de aplicación de este procedimiento. También le pide que facilite datos estadísticos que indiquen los progresos realizados en relación con las prácticas tradicionales perjudiciales y su incidencia en la transmisión del VIH.

26. **El Sr. Abashidze** señala a la atención las contradicciones que, al parecer, existen en la Constitución de Etiopía, algunos de cuyos artículos solo se aplican a los ciudadanos etíopes, en particular el artículo 41, relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, mientras que otros, por ejemplo, el artículo 25, relativo a la discriminación, se aplican a todas las personas, y pregunta si los extranjeros que viven legalmente en el territorio de Etiopía gozan plenamente de sus derechos económicos, sociales y culturales.

27. **El Sr. Riedel** ruega a la delegación de Etiopía que facilite un resumen por escrito de las respuestas a la lista de cuestiones que deben abordarse. Le pide que formule comentarios sobre los desplazamientos y reasentamientos de personas sin su libre consentimiento que, al parecer, se han realizado en las zonas de conflicto armado, en particular en el Estado Regional Somalí, y que afectarían en particular a las poblaciones nómades, así como sobre las alegaciones según las cuales el Gobierno no estaría cooperando plenamente en las zonas de conflicto. Solicita a la delegación que en el próximo informe periódico se faciliten datos desglosados y acompañados de calendarios correspondientes a cada una de las respuestas a la lista de cuestiones que deben abordarse a

fin de que el Comité pueda evaluar los progresos realizados aplicando los criterios enunciados en el artículo 2 del Pacto.

28. **El Sr. Abdel-Moneim** pide a la delegación de Etiopía que suministre información más detallada sobre la incidencia de la crisis económica mundial en las contribuciones de los donantes, sobre todo las destinadas a financiar proyectos de infraestructura y a paliar la situación alimentaria.

29. **El Sr. Getahun** (Etiopía) explica que el retraso en la presentación de las respuestas a la lista de cuestiones se debió al grado de detalle exigido, razón por la cual hubo que consultar con diferentes instituciones gubernamentales y ministerios. Asimismo, la presentación tardía del informe nacional obedece a que Etiopía ha ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos los instrumentos regionales, y la reunión de información en todas las regiones es una tarea difícil para el país, que carece de competencias técnicas y de recursos. Para resolver este problema, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha preparado un documento de reflexión sobre esta cuestión a fin de establecer un sistema sostenible de elaboración de informes. En colaboración con la Oficina Regional del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Addis Abeba, el Gobierno ha establecido un comité nacional de gestión encargado de un proyecto encaminado a presentar todos los informes atrasados, en particular en el marco del Examen Periódico Universal, así como un comité nacional y un comité de redacción. Se ha contratado a un gran número de jóvenes para trabajar en esos comités. El Gobierno también ha solicitado la participación de todas las instituciones federales y regionales y ha organizado dos conferencias nacionales sobre esta cuestión, lo cual ha permitido evaluar el grado de conocimiento del Pacto. Asimismo, la delegación espera poder presentar su próximo informe al Comité en tiempo útil y con el grado de detalle exigido.

30. En cuanto a la presentación de denuncias por particulares, ninguna política gubernamental se opone a ese procedimiento, pero el proceso establecido a tal efecto por el sistema de las Naciones Unidas requiere considerables recursos financieros y humanos. Etiopía examinará en su debido momento y en función de los medios de que disponga cuáles instrumentos podrá ratificar. Etiopía tampoco ha adoptado políticas contrarias a los procedimientos especiales, pero, en lugar de dirigir una invitación permanente a los titulares de mandatos de esos procedimientos del Consejo de Derechos Humanos, prefiere decidir caso por caso acerca de sus modalidades de cooperación. Ya se ha invitado a gran parte de los relatores especiales a visitar Etiopía y se están celebrando consultas para invitar a los otros.

31. Con respecto a la necesidad de garantizar la coherencia entre el derecho consuetudinario o religioso y el derecho constitucional, los derechos consuetudinario y religioso solo se aplican a cuestiones específicas, fundamentalmente vinculadas con el derecho de la familia, mientras que la Constitución establece el marco general. En ella se dispone, en particular, que las prácticas tradicionales o religiosas no deben ser perjudiciales ni violar las disposiciones del Código de la Familia.

32. La educación en materia de derechos humanos está a cargo de las instituciones públicas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aplica un importante programa en esta esfera. De una manera más general, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumple los Principios de París porque es independiente, se basa en consultas nacionales y se inspira en la experiencia adquirida en todo el mundo. Por consiguiente, merece ser incluida en la categoría "A".

33. Ninguna organización de la sociedad civil está prohibida en Etiopía. La Proclama Nº 621/2009, sobre registro y reglamentación de las entidades benéficas y las sociedades, crea un marco propicio para el ejercicio de la libertad de asociación en el país y establece un sistema previsible, transparente y basado en el principio de la responsabilidad en materia

de acreditación y funcionamiento. La prohibición de que las organizaciones que llevan a cabo actividades de defensa de los derechos humanos reciban de donantes extranjeros más del 10% de su financiación, porque en caso contrario se considerarán extranjeras, no es en absoluto limitativa, ya que sus integrantes están bien arraigados a nivel local y existen posibilidades de obtener financiación nacional. La cuestión del bloqueo de fondos se ha planteado ante los tribunales nacionales y, una vez desbloqueados, esos fondos se podrán utilizar respetando las normas establecidas. Dos organizaciones que recibieron fondos después de la entrada en vigor de la Proclama han recurrido la decisión de bloquear sus fondos, lo cual demuestra que existen recursos. Cualquiera sea la esfera de actividad, es fundamental que el 70% de las sumas recaudadas, en el país o en el extranjero, se utilice para financiar los proyectos a los que estaban destinadas, mientras que el 30% restante se dedicará a sufragar los gastos de funcionamiento.

34. La seguridad alimentaria es una cuestión prioritaria para el Gobierno y el principal objetivo es mejorar la productividad de las pequeñas explotaciones agrícolas, en particular mediante el uso de semillas de alto rendimiento y la adopción de prácticas más eficaces. El Gobierno tiene el propósito de promover la explotación de las tierras arables no utilizadas en el oeste del país, donde podrían desarrollarse actividades agrícolas en gran escala. Ha establecido programas de gestión del agua y de prevención y alerta temprana de sequías, gracias los cuales hace veinte años que no se registran hambrunas en el país, incluso en épocas de sequía. Se distribuyen alimentos como medida de prevención —en particular en el este del país, afectado por el fenómeno de La Niña— y sin ningún tipo de discriminación. Esta política permite evitar los desplazamientos de población.

35. Etiopía no lleva a cabo desplazamientos forzados o arbitrarios. Por lo demás, tampoco tiene necesidad de hacerlo porque posee alrededor de 84 millones de hectáreas de tierras cultivables no utilizadas ni pobladas. Los programas de reasentamiento son voluntarios y su finalidad es permitir el acceso de las poblaciones a los servicios básicos, incluidos los de salud. Algunos proyectos de utilidad pública, como la construcción de presas, entrañan desplazamientos de población, pero estos se realizan con el libre consentimiento de las personas afectadas, que reciben debida indemnización.

36. **El Sr. Yimer** (Etiopía) reitera que no se ha llevado a cabo ningún reasentamiento forzado en el territorio de Etiopía. La lucha del Gobierno contra el terrorismo no ha abarcado ninguna operación de ese tipo. El Sr. Yimer recalca la total independencia del sistema judicial e indica que todos los instrumentos internacionales, incluido el Pacto, forman parte del derecho interno y, por ende, es posible invocarlos ante los tribunales. Por supuesto, los extranjeros gozan de los derechos económicos y sociales en Etiopía, aun cuando hay algunos derechos que solo pueden ejercer los etíopes.

37. El principal objetivo del Plan quinquenal de crecimiento y transformación es reducir la pobreza para que a más tardar en 2015 Etiopía pase a ser un país de ingresos medios. Se puede ser razonablemente optimista en cuanto al logro de ese objetivo: la economía etíope está en plena expansión y Etiopía es uno de los diez países del mundo con mayor tasa de crecimiento. El Sr. Yimer señala que, por el momento, no se prevé despenalizar la homosexualidad, debido a diversas razones de índole social y cultural. Da seguridades al Comité de que en su próximo informe periódico Etiopía proporcionará más datos estadísticos.

38. **El Sr. Getahun** (Etiopía) señala que la mayor parte de las tierras arables disponibles se destinan a la inversión agrícola comercial y que la lucha contra un grupo terrorista en la región somalí no es en absoluto un conflicto armado: se trata de una respuesta de la policía y las Fuerzas de Defensa a unos actos terroristas. Etiopía respeta los Convenios de Ginebra y los protocolos adicionales conexos y se compromete a seguir trabajando con todas las organizaciones internacionales debidamente autorizadas y a permitir su acceso a todas las regiones.

39. **El Sr. Abraha** (Etiopía) recuerda que durante los últimos ocho años, gracias al PASDEP (2004-2010) y al Plan quinquenal de crecimiento y transformación, que hace especial hincapié en la modernización del sector agrícola, Etiopía ha registrado un crecimiento medio anual del 11%. Según las previsiones, durante los próximos 5 años esa tasa de crecimiento se mantendrá.

40. **El Sr. Hidug** (Etiopía) dice que se está ejecutando en las regiones un proyecto de "creación de aldeas". La finalidad de ese proyecto del Gobierno federal es mejorar los medios de subsistencia gracias al Plan nacional de crecimiento y desarrollo, centrado en la eficacia de los servicios económicos y sociales (agua potable, atención sanitaria de calidad, enseñanza de calidad, mejor acceso a los mercados, mejores prácticas agrícolas y fortalecimiento de las infraestructuras viales, energéticas y de telecomunicaciones).

41. Ya hay más carreteras y se han construido dos canales de riego a lo largo del río Omo. Todas las actividades realizadas contribuyen, en particular, a mejorar el acceso a la salud y reducir la mortalidad materna. La práctica del cultivo de riego beneficia a toda la población de la región. Los programas de reagrupación en aldeas y las intervenciones relacionadas con el desarrollo se llevan a cabo respetando la Constitución y los principios democráticos consagrados en ella. Se trata de un proceso basado en consultas y de carácter voluntario. La reagrupación solo tiene lugar una vez que el Gobierno ha verificado la adecuación de las condiciones ambientales del sitio escogido. Los propietarios que han decidido reasentarse reciben tierras arables y se benefician de diversas prestaciones. Las fuerzas armadas jamás han impedido el regreso de una persona a su aldea de origen.

42. **El Sr. Getahun** (Etiopía) dice que ninguna ley distingue entre hombres y mujeres en los procedimientos judiciales. Etiopía dispone de múltiples instrumentos que garantizan la igualdad de hombres y mujeres con respecto al acceso a la justicia. En la formulación de todas las políticas públicas se tiene presente el Pacto. Todas las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados, del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal y de la Comisión Africana se han incorporado al Plan de acción nacional sobre los derechos humanos que está ultimando un organismo intergubernamental. Si bien algunas recomendaciones se basan en alegaciones, la mayoría de ellas se han aplicado. Es responsabilidad del Gobierno federal velar por que en todas las regiones se respeten las obligaciones internacionales contraídas por Etiopía. La educación en materia de derechos humanos forma parte de la instrucción cívica.

43. **El Sr. Abebe** (Etiopía) señala que el Estado Federal y los estados federados colaboran estrechamente. Las constituciones de los distintos estados se inspiran ampliamente en la Constitución federal, que tiene rango de ley suprema, se basa en los derechos y es acorde con los instrumentos internacionales ratificados por Etiopía. Existe un mecanismo de coordinación de la política exterior entre el Estado federal y los estados federados, administrado por el Ministro de Relaciones Exteriores. El Sr. Abebe da seguridades al Comité de que el Estado parte asigna suma importancia a la responsabilización de los ciudadanos e indica que la educación en materia de derechos humanos se imparte en todos los niveles de enseñanza. Las niñas y las mujeres se han beneficiado en gran medida de las políticas públicas de fomento del crecimiento. Por ejemplo, el número de niñas escolarizadas pasó de 469 en 1995 a 171 548 en 2010, y en el mismo período el número de jóvenes inscritas en la universidad pasó de 871 a 123 706.

45. **El Sr. Sadi** pide a la delegación que señale un caso concreto en el que se haya invocado el Pacto ante un tribunal, que aclare si existe una ley específica contra la discriminación y que indique cómo ha evaluado la Comisión Nacional de Derechos Humanos el respeto del Pacto en la legislación del país. Pregunta por si los esfuerzos desplegados para luchar contra las prácticas perjudiciales, en particular las mutilaciones genitales femeninas, son realmente eficaces, teniendo en cuenta la levedad de las penas impuestas a los autores de esos actos.

46. **La Sra. Shin** pregunta cuáles son las posibilidades reales de financiación de las ONG, puesto que la nueva ley sobre las organizaciones benéficas y las organizaciones de la sociedad civil limita al 10% la contribución del Estado y obliga a esas organizaciones a recaudar el 90% de sus fondos en Etiopía. La Sra. Shin desea saber qué razón existe para limitar la posibilidad de que reciban recursos del extranjero. Pide a la delegación que aclare en qué se basa para afirmar de manera tan categórica que no ha habido ningún reasentamiento forzoso e indique, en particular, la fecha en que las autoridades viajaron a la región de Gambella y el número de personas consultadas sobre el terreno. Por otra parte, la Sra. Shin considera poco razonable por parte de la delegación afirmar que las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados se basan en alegaciones. Por último, en lo que se refiere a la distancia entre la ley y la práctica, las informaciones que ha recibido indican que a menudo el procedimiento judicial conduce a la puesta en libertad del autor, en particular en los casos de violación.

47. **El Sr. Texier** expresa su estupor ante las declaraciones de la delegación: la organización Human Rights Watch, que le merece fe, ha publicado un informe titulado *Waiting here for death: forced displacement and villagisation in Ethiopia's Gambella region*, en el que se menciona a más de 70 000 víctimas de desplazamientos forzados, así como actos de violencia contra personas que se negaban a ser trasladadas.

48. **El Sr. Getahun** (Etiopía) reafirma que no ha habido desplazamientos forzados en la región de Gambella, una de las más extensas de Etiopía, muy poco poblada y dotada de suficientes tierras arables. Señala que no es la primera vez que Human Rights Watch difunde informaciones inexactas sobre la situación en Etiopía, como el Gobierno de Etiopía ya ha tenido ocasión de aclarar públicamente. No desea polemizar con el Comité, el cual evalúa por sí solo la exactitud de las informaciones que recibe y tiene perfecto derecho a mantener su posición.

49. Con respecto a la financiación de las ONG, el Sr. Getahun responde que Etiopía dispone de suficientes recursos en el plano nacional para recaudar fondos que permitan sufragar los costos de las actividades de concienciación que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil y señala que un recurso sistemático a la ayuda internacional no es necesariamente beneficioso. En materia de concienciación, los recursos humanos —es decir, las personas que dedican todo su tiempo y energía a la causa que defienden— son más importantes que los recursos financieros y el sistema de gestión de las organizaciones locales es mucho más transparente que el de las organizaciones extranjeras, que esgrimen la miseria de los niños etíopes para recaudar fondos. El Gobierno dice que Etiopía no se opone a la realización de actividades de concienciación: le parece preferible que estén a cargo de organizaciones de la sociedad civil locales en lugar de ONG extranjeras que acuden masivamente al país, con consiguiente el riesgo de duplicar las actividades.

50. Por último, el Gobierno de Etiopía no desea depender de la ayuda oficial para el desarrollo, que no la ayudaría a salir de la pobreza y que, además, corre el riesgo de desaparecer a raíz de la crisis internacional. Por lo demás, actualmente Etiopía solo recibe una cuarta parte de los fondos que deberían suministrarle los donantes habituales y la destina a atender a los huérfanos. No por ello deja de agradecer a la comunidad de donantes —entre ellos la Unión Europea y la USAID—, que financia los programas de fomento de la seguridad alimentaria y el mecanismo de prevención y alerta temprana, y con la que le consta que puede contar en situaciones de emergencia.

Artículos 6 a 9 del Pacto

51. **El Sr. Texier** se refiere a la diversidad étnica del Estado parte y pregunta si existe un motivo concreto por el que Etiopía no ha ratificado el Convenio N° 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, y si tiene el propósito de hacerlo.

52. El Sr. Texier dice que sería conveniente que el Comité dispusiera de datos estadísticos más recientes sobre el desempleo en Etiopía, el cual en 2005 era, en todas las regiones del país, mucho más alto entre las mujeres que entre los hombres. Tal vez la delegación podría indicar qué medidas concretas se han adoptado para reducir el desempleo de las mujeres, e informar acerca de la importancia del trabajo informal en el Estado parte.

53. La delegación tal vez podría indicar también si el Estado parte ha establecido un salario mínimo en el plano nacional o incluso regional, y, de ser así, si su cuantía se negoció con los agentes sociales. En caso de que no exista, ¿el Estado parte tiene el propósito de establecerlo?

54. Observando que aún no se ha acreditado a la Asociación Nacional de Docentes (NTA) —a pesar de las numerosas recomendaciones formuladas a tal efecto por el Grupo de expertos independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, el Sr. Texier expresa su preocupación por las amplias facultades discrecionales de que goza el Gobierno en materia de registro, administración y disolución de las asociaciones y de otros sindicatos. A ese respecto, recuerda que la OIT ha considerado que esta ley es contraria a las disposiciones de sus Convenios N° 87 y N° 98, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, respectivamente.

55. **El Sr. Martynov** desea que se faciliten datos cuantitativos sobre los resultados de los diversos programas aplicados por el Estado parte para reducir el desempleo, en particular el Programa de desarrollo de las microempresas y pequeñas empresas, el Conjunto de medidas para el desarrollo de la juventud urbana o las medidas de promoción de la mujer en el mercado de trabajo. Pregunta cuántas personas se benefician actualmente de la Estrategia nacional de educación y formación profesional y técnica, y acogería con beneplácito que se informara sobre los instrumentos eficaces establecidos por el Estado parte para facilitar la reinserción de esos beneficiarios en el mercado de trabajo.

56. El Sr. Martynov expresa su satisfacción por que el Estado parte haya ratificado en 2010 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y pregunta cuántas personas con discapacidad hay actualmente en Etiopía y cuál es la tasa de empleo correspondiente, en que consisten las iniciativas encaminadas a promover el empleo de esas personas y si las empresas públicas y privadas que las contratan y adecuan sus puestos de trabajo se benefician de incentivos.

57. El Sr. Martynov ruega a la delegación que indique si el Estado parte ha establecido un sistema de inspección del trabajo y, de ser así, si ese mecanismo cuenta con recursos suficientes para garantizar el respeto de las normas internacionales de salud y seguridad en el lugar de trabajo, al menos en las empresas del sector estructurado. También sería útil que señalara el porcentaje de trabajadores asalariados del sector público con cobertura médica gratuita y que indicara cuál es la situación de los empleados del sector privado a ese respecto. Además, desea saber qué medidas prevé adoptar el Gobierno para que las personas que trabajan en la economía no estructurada (más de la mitad de la fuerza de trabajo en 2005) también tengan derecho a la seguridad social.

58. El Sr. Martynov expresa su satisfacción por el aumento de la cuantía de las pensiones de jubilación en enero de 2011, después de un largo período en que se habían mantenido sin cambios, y desea saber si el Estado parte prevé su indexación en función de la inflación.

59. **El Sr. Kedzia** pregunta si la situación de las mujeres con respecto al desempleo ha mejorado desde 2005, habida cuenta de que por entonces el 74% de ellas estaban desempleadas. Desea saber qué porcentaje de mujeres trabajan en el sector no estructurado y si estas tienen acceso a una protección social. Pregunta si en el Estado parte se aplica el principio de la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de

obra femenina por un trabajo de igual valor, se refiere a las diferencias de remuneración que se han comprobado y desea saber qué medidas se han adoptado para corregir esa situación. Pregunta si el objetivo del Plan quinquenal de crecimiento y transformación —que, gracias a un mayor acceso a la formación, el 30% de las mujeres ocupe puestos directivos y el 50% puestos intermedios— tiene buenas perspectivas de alcanzarse y qué métodos aplica el Estado parte para su consecución.

60. El Sr. Kedzia desea saber qué medidas se han adoptado en el sector privado y en el sector no estructurado para garantizar a los trabajadores un entorno laboral saludable y seguro. Pregunta cuál es el procedimiento previsto para la acreditación de los sindicatos y si, en caso de que esta se deniegue, los interesados pueden recurrir esa decisión ante alguna instancia y, de ser así, si se trata de una instancia judicial o de un organismo independiente o público. Por último, pide a la delegación que indique si el Gobierno garantiza el ejercicio del derecho a la libertad sindical en el sector privado y si las personas que trabajan en el sector no estructurado tienen o no derecho a sindicarse.

61. **El Sr. Abdel-Moneim** pregunta si el Estado parte ha aprovechado su excelente tasa de crecimiento para mejorar la situación del empleo en el plano nacional y si el apoyo prestado a las microempresas y pequeñas empresas (párr. 67 del informe) ha permitido crear los aproximadamente 300 000 empleos previstos.

62. **El Sr. Ribeiro Leão** toma nota de que la seguridad alimentaria ocupa un puesto central en el Programa de Desarrollo Sostenible y Reducción de la Pobreza (párr. 219 del informe) y pregunta qué proporción del presupuesto del Estado se asigna a las políticas de promoción del desarrollo agrícola y en qué consisten los programas establecidos por el Estado parte en esa esfera, en los cuales el riego desempeña, sin duda, una función clave. Desea saber si las medidas de mitigación adoptadas en todos los niveles de gestión del sector hídrico para hacer frente a los problemas mencionados en el párrafo 247 del informe han permitido obtener los resultados previstos.

63. **El Sr. Riedel** pregunta qué medidas se propone adoptar el Estado parte para mejorar rápidamente el acceso al agua potable y al saneamiento en las zonas rurales. Desea saber qué medios prevé emplear el Estado parte a fin de alcanzar el objetivo ambicioso de que para 2015 otros 34 millones de personas (de las cuales 31 millones en zonas rurales) hayan accedido al agua potable.

64. El Sr. Riedel ruega que se facilite información complementaria sobre la atención que se presta en el Estado parte a las personas con trastornos mentales, en particular sobre el trato que reciben en los lugares de detención. Desea saber si, en general, el Estado parte prefiere la hospitalización de esas personas o su seguimiento en un servicio ambulatorio facultado para decidir de oficio su internación; por último, pregunta si esas decisiones se pueden recurrir y, de ser así, ante qué instancia.

65. **El Sr. Atangana** pregunta por qué razón las mujeres víctimas de violación se muestran renuentes a presentar denuncias, habida cuenta de que, según la delegación de Etiopía, el sistema judicial goza de total independencia.

66. **La Sra. Barahona Riera** pide a la delegación que facilite al Comité una copia de la legislación penal relativa a la violencia en el hogar, para que este pueda conocer exactamente qué actos cometidos en el ámbito familiar están tipificados como infracciones penales. Estima conveniente que se proporcione información complementaria sobre los efectos de los planes y programas de lucha contra las violencias sexuales infligidas a mujeres y niños y contra las prácticas tradicionales nefastas, como las mutilaciones genitales femeninas. Ruega a la delegación que indique cuál es el presupuesto asignado a esos distintos programas y qué organismo se encarga de aplicarlos. Habida cuenta de la coexistencia de dos regímenes jurídicos —la *sharia*, por una parte, y el Código de la Familia y el Código Penal, por la otra— desea saber si los tribunales ya han visto causas

relacionadas con actos de violencia, incluidas violaciones, contra mujeres o niños, y si las denuncias correspondientes han dado lugar a condenas.

67. La Sra. Barahona Riera ruega a la delegación de Etiopía que indique qué servicios se han creado y qué programas de educación se aplican en materia de salud sexual y reproductiva. Toma nota de que el Estado parte no prevé despenalizar la homosexualidad y desea saber si existen programas de información orientados a los homosexuales sobre los modos de infección por el VIH y, en general, qué política aplica el Estado parte para luchar contra la pandemia del VIH/SIDA.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.